



AL SERVICIO DE LA JUSTICIA Y DE LA PAZ SOCIAL

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ARTURO GUERRA HIGUITA

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN,  
SALA CIVIL DE DECISIÓN.**

**Medellín, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno.**

Proceso: Verbal (Responsabilidad Civil Extracontractual)

Demandantes: LUZ MARINA HENAO RUIZ Y OTROS.

Demandado: AMBULANCIAS BIOSALUD S.A.S. Y  
OTROS.

C.U.D.R.: 05001 31 03 003 **2017 00468-02**

Rdo. Interno: 075-20

AIV: 077/21

**ASUNTO:** No repone auto que declara desierto recurso de apelación.

Se decide el recurso de reposición promovido por el apoderado de la parte demandante, contra el auto que declaró desierto el recurso de apelación por él interpuesto, en contra de la sentencia proferida por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN, el 12 de noviembre de 2020, por no haberse sustentado en la oportunidad legalmente contemplada para tal efecto, en los siguientes términos:

**1.0. ANTECEDENTES.**

Por auto del seis de mayo de los corrientes, se admitió la apelación formulada en contra de la sentencia antes referenciada, incoada por el

vocero judicial de la parte demandante, disponiéndose dar aplicación a los artículos 9° y 14 del decreto 806 de 2020, esto es, se concedió al recurrente el término de cinco (5) días, contados a partir de la notificación de la misma, para sustentar el recurso, el cual venció el 11 de mayo de 2021 en silencio, acorde con la constancia secretarial del 10 de junio del año en curso, razón por la cual se procedió a declarar desierto el recurso en auto del 12 de agosto de los corrientes.

Dentro del término de ejecutoria de este último proveído, el togado que asiste los intereses de la parte demandante, solicitó que fuera revisada la decisión adoptada en el mismo, exponiendo:

*“1. El magistrado sustanciador, desconoció los límites de la aplicación inmediata del cambio de la posición jurisprudencial. Al respecto, es menester poner en consideración lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-406 de 2016:*

*“El cambio de una determinada posición jurisprudencial por el respectivo órgano de cierre, implica una modificación en la interpretación jurídica, es decir, del contenido normativo de determinada disposición y que, en atención al carácter vinculante general e inmediato del precedente, determina la aplicación judicial -en el orden horizontal y vertical- del derecho sustancial o procesal, según sea el caso. Ahora bien, no obstante que la aplicación general e inmediata de un nuevo precedente fijado por un órgano de cierre de la jurisdicción vincula a la administración de justicia como una garantía del principio de igualdad, tal regla general no puede pasar por alto el contenido material de la misma igualdad al que se hizo referencia anteriormente, y que conduce a que cada situación sea observada a la luz de las circunstancias particulares. Esta Corte concluye que, si bien la regla general indica que la jurisprudencia rige con efectos inmediatos y en este sentido vincula a los operadores judiciales que deben tenerla en cuenta en sus decisiones, la autoridad judicial tampoco puede pasar por alto que, en ciertos escenarios concretos, la actuación de los sujetos procesales pudo estar determinada por la jurisprudencia vigente para entonces, por lo que el fallador, al momento de proferir su decisión, debe establecer, a partir de una análisis fáctico, si el cambio de jurisprudencia resultó definitivo en una posible afectación de derechos fundamentales al modificar las reglas procesales con base en las cuales, legítimamente, habían actuado los sujetos procesales y, en este sentido, el juez de conocimiento puede, como excepción a la regla general de aplicación de la jurisprudencia, inaplicar un criterio jurisprudencial en vigor al momento de proferir el fallo, pero contrario a uno anterior que resultó determinante de la conducta procesal de las partes”.*

*En este orden, véase que la etapa de la sustentación del recurso de apelación, para el 10 de junio de 2021, ya se encontraba consolidada bajo la jurisprudencia que regía en el momento - aplicada además por el despacho- y, por tanto, era deber del magistrado sustanciador, proferir sentencia teniendo en cuenta los reparos concretos elevados en primera instancia, los cuales fueron suficientes para equiparse a una sustentación. No obstante, el magistrado, aplicando indebidamente un precedente posterior, de fecha 28 de julio de 2021 -que unificó el trámite del recurso de apelación-, desconociendo el derecho al debido proceso y a la doble instancia, declaró desierto el recurso de apelación, en el cual supuestamente ya había transcurrido el término de sustentación, que haciendo las cuentas del despacho, vencía el **24 de mayo de 2021**.*

*2. De otro lado, véase que el magistrado sustanciador, sorpresivamente, en el auto de 06 de mayo de 2021, por medio del cual admitió el recurso de apelación, simplemente expuso lo siguiente:*

***“Como la sentencia fue impugnada en vigencia del DECRETO 806 de 2020, se observará el trámite consagrado en los artículos 9 y 14 de la referida normatividad.***

*Dentro del término de ejecutoria de la presente providencia las partes deberán actualizar las direcciones, teléfonos y correos electrónicos en las que recibirán notificaciones y comunicaciones.*

*Si las partes requieren del expediente digital, deberán solicitar el acceso al mismo o de las piezas procesales que necesiten a la SECRETARIA DE LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, al correo electrónico [secivmed@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:secivmed@cendoj.ramajudicial.gov.co).”*

*Nótese que el magistrado, en el auto atacado, simplemente dijo que “se observará el trámite consagrado en los artículos 9 y 14” del Decreto 806 de 2020, pero en dicha providencia no indicó que el término para sustentar el recurso empezaría a correr una vez estuviera ejecutoriado el auto que admitió la apelación y tampoco profirió un auto por aparte, **como si lo ha hecho en otras oportunidades**, como se desprende del auto que anexo a este escrito, proferido por el magistrado sustanciador, que data de 29 de julio de 2021, en el proceso verbal tramitado bajo el radicado 05001-31-03-003-2016-00926-02. Esa situación, resulta confusa para los abogados, máxime que todos los magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín -incluyendo al propio magistrado sustanciar como se acaba de acreditar-, ya sea en el auto que admite la apelación o en auto aparte, conceden el término de 05 días para sustentar la apelación, lo cual genera seguridad jurídica. Así lo compruebo en los autos que anexo al presente escrito, proferidos por los magistrados Luis Enrique Gil Marín, Martha Cecilia Lema Villada, Ricardo León Carvajal Martínez, Martín Agudelo Ramírez, José Gildardo Ramírez, Juliana Valencia Castaño, Martha Cecilia Ospina, José Omar Bohórquez y Sergio Raúl Cardoso González.”*

De dicho recurso se dio traslado a la parte demandada en los términos del artículo 110 del Código General del Proceso, vencido el cual se ingresó el proceso digital al Despacho sin pronunciamiento alguno de dicha parte.

## **2.0. CONSIDERACIONES.**

Contempla el artículo 318 del Código General del Proceso, que quien pretenda controvertir determinada decisión, ante el mismo funcionario que la dictó, ya sea para que éste la revoque o reforme y en su lugar profiera otra distinta, podrá interponer *recurso de reposición* dentro de los tres días siguientes a la notificación de la decisión objeto de reparo o en el mismo momento en que la misma se adopte, si se hace en audiencia.

Igualmente, exige la citada preceptiva que, en el escrito contentivo del recurso, se expongan las razones que lo sustenten, o si se realiza en audiencia, deberán consignarse en la misma.

Es así, que el vocero judicial de la parte demandante, haciendo uso de dicho mecanismo de contradicción, dentro del término legalmente establecido, formuló recurso de reposición en contra del auto que declaró desierta la alzada promovida frente a la sentencia emitida en primera instancia.

Como sustento de inconformidad expuso el citado profesional, que no se podía aplicar un precedente jurisprudencial posterior, esto es, de fecha 28 de julio de 2021, porque el trámite del recurso había iniciado con anterioridad, además, porque en el auto admisorio del recurso simplemente dijo que se observaría el trámite consagrados en los artículos 9 y 14, del Decreto 806 de 2020, pero en dicha providencia no se indicó expresamente

que el término para sustentar el recurso empezaría a correr una vez estuviera ejecutoriado la citada providencia.

Inicialmente y frente al segundo de los argumentos, hay que significar que la providencia cuestionada verticalmente había sido proferida en vigencia del Decreto 806 de 2020, por tanto, el trámite fue el contemplado en los artículos 9 y 14 de dicha normatividad, para efecto de darle prevalencia a la utilización de medios virtuales y tecnológicos, en procura de mantener la celeridad del proceso y en aras de velar por la salud de usuarios de la justicia, jueces y magistrados, lo cual se indicó de manera expresa en el auto que admitió la apelación impetrada por la parte demandante.

Las citadas normas, hacen relación a la forma de notificación y trámite de la apelación, entre otras, en material civil, indicando:

*“...Sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, dentro del término de ejecutoria del auto que admite la apelación, las partes podrán pedir la práctica de pruebas y el juez las decretará únicamente en los casos señalado en el artículo 327 del Código General del Proceso. El juez se pronunciará dentro de los cinco (5) días siguientes.*

*Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes. De la sustentación se correrá traslado a la parte contraria por el término de cinco (5) días. Vencido el término de traslado se proferirá sentencia escrita que se notificará por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarará desierto...”*

En ese sentido, con sola alusión de la norma, debía entenderse por la parte impugnante, que debía sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de su admisión, pues quien representa a la parte demandante es un profesional del derecho que debe conocer la normativa, o por lo menos, debió acudir a ella cuando se le hizo mención.

Por tanto, para la Sala no es un argumento válido la afirmación de que debió indicarse en el auto el término que se le había otorgada para sustentar el recurso, puesto que el interregno fue establecido por la misma normativa, que valga resaltar, fue puesta de presente a las partes en el auto admisorio de la alzada. El que en algunos autos se haya dispuesto por auto aparte esa consideración, no invalida o desmerece la actuación cuestionada, dado lo claro de la norma.

Ahora, en relación con el primer argumento, en efecto, mediante sentencia SC3148-2021, emitida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 28 de julio de 2021, radicado 05360 31 10 002 2014 00403 02, M.P. ALVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO, **unificó** la posición frente al momento procesal en el cual el recurrente debía sustentar la apelación promovida en contra de la sentencia, tal como se explicó en el auto atacado, que no es otro que **ante el Superior**, destacando que ello es viable tanto bajo el imperio del precepto 322 del Código General del Proceso, como bajo la vigencia del Decreto 806 de 2020.

Y si bien, previo a la aludida sentencia había otro enfoque al respecto, en el sentido de que bastaba exponer los reparos concretos en contra de la sentencia de primer grado, para considerarse como sustentada la apelación impetrada, también existían en nuestro máximo Tribunal, concretamente en unas Salas, otras posiciones en contrario, por tanto, no es que hubiere existido un cambio de Jurisprudencia, sino que, ente la disparidad de perspectivas al respecto, en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, hubo la necesidad de una unificación frente a la forma como debía sustentarse la apelación en segunda instancia, y a tan unificación se acoge este Despacho.

Bajo estas condiciones, no es admisible la indicación del recurrente, en cuanto que, para la etapa de sustentación del recurso, se encontraba consolidada bajo la jurisprudencia que regía en el momento, pues la

posición frente a este tema, esto es, la manera de sustentación del recurso en segunda, nunca fue pacífica, y en ese sentido, no podía hablarse de Jurisprudencia unificada, como ahora sí lo es.

Es que, frente a la sustentación, conforme viene de señalarse, era necesario realizarla en esta instancia, independientemente de que el trámite que se aplicara fuera el establecido en el Código General del Proceso, o en el Decreto 806 de 2020, pues en ambos eventos, no resulta admisible como tal el pronunciamiento que se realice ante el *a quo*. Lo único que varió, y se puso de presente en el auto pertinente, fue que ya no se celebraría audiencia en segunda instancia para sustentar la apelación, si no que ahora debe hacerse por escrito y a través de medios electrónicos.

Finalmente se acota que, entender que una “pre-sustentación” como algunos la denominan, que unos reparos ampliamente expuestos, equivalen a la sustentación misma ante el superior, desconoce la unificación mencionada, y, además, conduce a la inseguridad jurídica y a la incertidumbre, tornando lo que debía ser regla general en pura “casuística”, pues ahora será cada juez o magistrado quien defina, según su criterio, si esos reparos ampliamente expuestos equivalen a sustentación; sin dejar de lado que también se ponen en entredicho los derechos de la contraparte, de quien no apeló, pues estará sujeto, primero, a la decisión del juez o magistrado ad-quem sobre si existe o no sustentación; y segundo, se le dificultará en grado sumo pronunciarse, pues no se sabe con certeza si habrá o no traslado del recurso, en tanto, inicialmente sólo se trataba de reparos y el traslado está previsto en el decreto 806 de 2020 para la sustentación como tal.

En consecuencia, no se repondrá el proveído que declaró desierto el recurso de apelación contra la sentencia proferida por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN, el 12 de noviembre de 2020.

Consecuente con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en Sala de Decisión Civil,

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** NO REPONER el auto que declaró desierto del recurso de apelación contra la sentencia proferida por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN, el 12 de noviembre de 2020, al interior del proceso VERBAL (Responsabilidad Civil Extracontractual) promovido por LUZ MARINA HENAO RUIZ y DIANA MARCELA RUEDA LLANES, en nombre propio y en representación de la menor JULIETA HENAO RUEDA en contra de AMBULANCIAS BIOSALUD S.A.S., JOHN ALEXANDER GÓMEZ ECHEVERRI, FRANCISCO MIGUEL ARGUDEMO RAMOS y ALVARO MARIN BONILLA SANDOVAL.

**SEGUNDO:** En consecuencia, devuélvase el expediente digital al Juzgado de origen.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

El Magistrado,



**CARLOS ARTURO GUERRA HIGUITA**

C.U.D.R. 05001 31 03 003 2017 0468-00